

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras de Puerto Varas
CAUSA ROL : C-2739-2017
CARATULADO : SPRINGER/FURRIANCA

Puerto Varas, siete de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 26 de febrero de 2018 comparece doña **MARÍA EMILIA ALVARADO MIRANDA**, abogada, por **ANA MARÍA SPRINGER HITSTHFELD**, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra de doña **PAOLA ANDREA COFRE ALVARADO**, ignora profesión u oficio, y en contra de don **LUIS MARCELO FURRIANCA ÁLVAREZ**, ignora profesión u oficio, ambos domiciliado en Lago Chapo N° 210, comuna de Frutillar.

Relata que el día 09 de marzo de 2017, en circunstancia que su mandante salía de su lugar de trabajo “Comercial Manjen Limitada”, el que se encuentra emplazado en las inmediaciones de la “Casa de té de Lavanda”, se subió al vehículo encargado del transporte del personal de la empresa para la que trabajaba, en el lugar del copiloto, vehículo correspondiente a un minibús, marca Hyundai, modelo grace, PPU ND-9113, el que era conducido por doña Paola Andrea Alvarado Cofre, y que era de propiedad de don Luis Marcelo Furrianca Álvarez.

Narra que el día indicado, a las 21:00 hrs., cuando el vehículo inicia su recorrido habitual para trasladar a los trabajadores a sus domicilios, a la altura del Km.2 del sector rural Quebrada Honda, de la comuna de Frutillar, el vehículo sufrió un accidente de tránsito porque, según los dichos de la demandada ante Carabineros, cuando salía de la casa de té y procedía a enfrentar cuesta abajo, se percata que los frenos del vehículo no funcionaban, provocando que el furgón alcanzara una alta velocidad, perdiendo el control y chocando con una ladera del camino, siendo el impacto de tal envergadura que el furgón quedo incrustado en una zanja al costado del camino, lo que fue desvirtuado por el informe técnico de la SIAT de Carabineros.

Señala que ante el inminente choque, su mandante se protege su rostro con sus manos, chocando su cabeza con el parabrisas, el que se quebró, saliendo eyectada del vehículo, sintiendo que se le fracturaron los brazos, provocándole



mucho dolor, hasta el punto de no poder moverlos, sufriendo además un fuerte golpe en la rodilla.

Indica que según el parte policial, las lesiones sufridas fueron de carácter grave, siendo llevada al servicio de urgencia del Hospital de Frutillar, donde en la anamnesis indica que soportó un *“golpe en la región frontal y ambos brazos contra el vidrio, sin compromiso de conciencia, sin amnesia de episodio, sin náuseas ni vómitos posteriores. Actualmente se queja por dolor y deformidad en el brazo derecho”*, siendo diagnosticada de fractura de la epífisis inferior del humero, según da cuenta el dato de atención de urgencia N° 6616146 de dicho establecimiento, siendo trasladada posteriormente al Hospital Base de Puerto Montt.

Comenta que las prestaciones médicas fueron solventadas por el seguro establecido en la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuyo periodo de rehabilitación concluyó el día 18 de noviembre de 2017, cuando fue dada de alta por los profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad, dejando claro que a pesar de su alta, su mandante no se encuentra cien por ciento recuperada, debiendo someterse a futuro a nuevos tratamientos e intervenciones quirúrgicas, sufriendo una serie de lesiones físicas y daños morales.

Afirma que su mandante fue hospitalizada el día 10 de marzo de 2017 en la Clínica de Puerto Montt, por convenio con la ACHS, donde se le diagnosticó *“fractura de humero proximal izquierdo, fractura humero distal derecho, neuropraxia radial derecha y fractura de platillo tibial lateral derecho”*, siendo sometida a una intervención quirúrgica de reducción y osteosíntesis de fracturas.

Expresa que en mayo de 2017, su mandante presenta una otalgia izquierda, correspondiente a un síntoma de enfermedad localizada en el oído externo o medio, originado en el traumatismo sufrido por el accidente sufrido, por lo que fue derivada para una evaluación por otorrinolaringología, donde se le indica una leve inestabilidad con rehabilitación vestibular.

Destaca que su mandante evoluciona con dolor y presenta un déficit de elevación del hombro izquierdo, y que según el informe médico de atención de fecha 19 de mayo de 2017, emitido por la ACHS, la actora presentada *“cefalea post traumática; fractura platillos tibiales cerrada; fractura humero, epífisis inferior cerrada; fractura humero, epífisis superior cerrada”*.

Continúa relatando que en noviembre de 2017, según informe de fecha 16 de noviembre, la actora presentaba los siguientes diagnósticos: *“trastornos de adaptación; capsulitis adhesiva de hombro; cicatriz hipertrófica/ queloidea / queloide cualquier parte; cefalea post traumática; fractura platillos tibiales cerrada; fractura humero, epífisis inferior cerrada; fractura humero, epífisis superior*



cerrada”, siendo dada de alta laboral ese mismo mes, pero siendo derivada a la comisión evaluadora de incapacidad, manteniendo controles con psiquiatría y traumatólogo de hombro.

Considera que lo expuesto implicó que su mandante no pudiera desplazarse de forma normal por muchos meses, debiendo utilizar en un comienzo silla de ruedas, por aproximadamente 3 meses, necesitando de ayuda de terceros para realizar las cosas más básicas de la vida cotidiana, como comer, vestirse, levantarse, asearse, entre otros. Que incluso no podía escribir ni dormir por las noches, al sentir un pitido en el oído izquierdo que le impedía conciliar el sueño, pasando a utilizar bastones posteriormente, pero siempre necesitando ayuda de otras personas, dado que le daban mareos.

Hace presente que en el plano emocional, su mandante sufrió nefastas consecuencias, sintiéndose vulnerable e indefensa, ya que de ser una mujer saludable, ahora depende de muchos fármacos, controles y tratamientos médicos para poder vivir un poco mejor, provocándole inseguridad, rabia, impotencia y frustración, sintiéndose a menudo desorientada y agotada, además de violentada en su dignidad como persona.

Comenta que por los hechos narrados se inició una investigación penal, causa RUC N° 1700239916-4, la que fue formalizada por la fiscalía local de Puerto Varas, en contra de la demandada Paola Alvarado Cofré, en cuyo contexto, existe un informe técnico de la SIAT de Carabineros, donde se determinó que el sistema de frenado del vehículo que ocasionó el accidente se encontraba en perfectas condiciones, por lo que ésta no fue la causa directa del accidente, siendo en consecuencia su causa la falla humana de quien conducía.

Que en cuanto a las consideraciones de derecho, cita los artículos 1437, 2314 y 2329 del Código Civil, haciendo presente el principio general del derecho de no dañar a otros, el que implica un deber jurídico de carácter genérico y omisivo, en el que un individuo que con su actuar culposos o doloso, ocasiona un daño a un tercero, debe responder de las consecuencias gravosas que produjo el evento dañoso.

Alega que la demandada ha creado un peligro desaprobado, actuando en forma negligente, citando igualmente los artículos 165 y 169 de la ley de tránsito.

Que respecto a los daños extra patrimoniales causados, cita los requisitos del daño, clasificándolo en carácter material o inmaterial, distinguiendo el daño patrimonial y el daño moral, haciendo presente que el tipo de daño patrimonial no será demandado, puesto que las prestaciones médicas fueron cubiertas por el seguro de accidentes del trabajo.



Que respecto al daño moral, cita definiciones de aquel, el que se clasifica en el dolor, angustia o malestar físico o espiritual, que ha sufrido su mandante, y en el caso del dolor físico, expresándose en la aflicción que producen las heridas y en el sufrimiento asociado a los tratamientos médicos necesarios, siendo el otro punto de vista la aflicción mental o espiritual que implica que el dolor adquiere innumerables matices e intensidades que se muestran en un largo catálogo de desgracias que afectan el bienestar espiritual de la víctima.

Señala que la reparación del daño moral opera como una compensación económica por el sufrimiento efectivo que ha afectado a la víctima, conllevando también una privación de ciertas ventajas en la vida, denominada por la doctrina como el perjuicio de agrado que involucra una disminución en la alegría de vivir.

Considera que su mandante ha sufrido daños morales positivos, al ver aumentado su dolor tanto físico como mental, y negativos, al influir en su vida cotidiana, perdiendo la alegría de vivir, por lo que demanda la suma de \$45.000.000, o la suma que en definitiva se estime en derecho.

Que en cuanto a la responsabilidad solidaria de don Luis Marcelo Furrianca Álvarez, se funda en lo prescrito en el artículo 174, inciso 2°, de la ley de tránsito, constando en el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, acompañado en el cuaderno de medida prejudicial precautoria, que el demandado es propietario del vehículo que sufrió el accidente a la fecha de su ocurrencia, citando fallo de la Excma. Corte Suprema.

Concluye solicitando, previa citas legales, se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de los demandados, ya individualizados, se admita a tramitación y en definitiva, se acoja la demanda y proceda a condenar a los demandados a pagar solidariamente a su mandante a título de daño moral una indemnización de \$45.000.000, o las sumas que se estime de derecho, con los respectivos intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la fecha de ingreso de esta demanda, y todo con expresa condenación en costas.

Que, con fecha 22 de marzo de 2018 consta notificación personal de ambos demandados.

Que, con fecha 14 de abril de 2018 comparece **PATRICIO LEANDRO RUIZ JARAMILLO**, abogado, en representación de doña **PAOLA ANDREA ALVARADO COFRE**, chilena, casada, chofer, y don **LUIS MARCELO FURRIANCA ALVAREZ**, chileno, casado, chofer, ambos domiciliados en calle Lago Chapo número doscientos diez, de la ciudad y comuna de Frutillar, quien contestó la demanda opuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.



Reconoce que efectivamente con fecha 09 de marzo de 2017, aproximadamente a las 21:00 hrs., su representada concurre en su calidad de conductora del vehículo individualizado en autos, para buscar a los trabajadores de un negocio dedicado principalmente a cafetería, denominado “Casa de té de Lavanda”, uno de los cuales era la demandante.

Indica que a metros de dicho negocio y aún en el camino de pendiente inclinada, perteneciente al predio en parte pavimentado y en otra ripiada, sin iluminación ni indicaciones reflectante y en medio de la lluvia, el vehículo, dada las piedras sueltas y la lluvia que inundaba la carpeta asfáltica en mal estado, derrapa, se arrastra por fuerza de gravedad, debiendo su representada orientar el vehículo hacia el costado izquierdo de la calzada, donde milagrosamente logro detenerse, sin poder evitar que quedara en la zanja próxima, destacando que la otra alternativa fatal, sino no hubiera su mandante actuado rápida y oportunamente, era el otro extremos de la vía, donde existe un acantilado, que habría significado la muerte de todos, por lo que fue solo la habilidad de la conductora, su conocimiento del camino, sus años de experiencia y decisión, lo que pudo evitar que se desbarrancaran o que el vehículo se volcara en la vía siguiendo su camino sin detenerse.

Afirma ser falso que la demandante haya salido eyectada del vehículo, dado que ninguno de los pasajeros se proyectó fuera del vehículo, pues el accidente no fue violento. Que la demandante no expone que en su calidad de copiloto, se la advirtió por su mandante que debía usar cinturón de seguridad, cuestión que no hizo que tuvo la consecuencia de no utilizar medios de retención que el vehículo tenía y que utilizaban los demás pasajeros, exponiéndose imprudentemente al daño, conforme al artículo 2330, resultando todas sus lesiones.

Señala ser igualmente falso que se haya iniciado una causa penal, desde que hace más de un año que se procedió a asignar un RUC para individualizar en el sistema computacional del Ministerio Público, pero sin que ello tenga alguna responsabilidad de su representada, sin que exista causa criminal alguna, ni resolución de formalización.

Alude a que el supuesto informe de la SIAT de Carabineros, no ha sido objeto de conocimiento, discusión, controversia, de ninguno de los participante del accidente ni del tribunal, sumado a que habría que revisar en extenso su contenido, para determinar la suficiencia e idoneidad de sus conclusiones.

Manifiesta que la víctima habla de lesiones utilizando términos médicos contenidos en la ficha clínica, que por sus términos aparecen como de una gravedad inimaginable, pero que solo se reducen a lesiones en brazos y piernas, las que evolucionaron rápidamente y tuvieron tratamiento de parte de la ACHS y



Clínica Los Andes, estando 2 meses recuperada y en 8 meses dada de alta en términos absolutos.

Refiere que las nefastas consecuencias descritas en el libelo y que configurarían su daño moral, podrían atribuirse a muchas causas, no necesariamente desencadenadas de un accidente en la que la actora solo sufrió lesiones no invalidantes, apareciendo exagerado el monto demandado, considerando la causa u origen del mismo y el daño sufrido, sobrepasando incluso el único patrimonio de sus representados, su casa y furgón, los que no superan los \$30.000.000, únicos bienes que se encuentran precautoriados.

Expone que será la demandante quien deberá acreditar la existencia del daño moral a través de los medios de prueba legal no objetados, concluyendo por ahora del libelo que se trata de un perjuicio hipotético. Que el daño reclamado no sería imputable a sus representados, dado que se describió que por el despliegue de su representado se pudo evitar una situación de gravedad. Que no es razonable exigir al hombre medio que emplee en sus actos una diligencia esmerada o cuidado ejemplar, como la de un hombre juicioso en sus negocios importantes, siendo del caso que el accidente se produjo por un hecho fortuito o fuerza mayor, por una condición extrema en el clima, las condiciones de un camino particular en mal estado, entre otros factores.

Excluye la existencia de una relación de causalidad entre el dolo y culpa y el daño, debiendo probarse que el accidente ocurrió por dolo o culpa de su representada, además del mencionado vínculo causal.

Concluye solicitando, previa citas legales, se tenga por contestada la demanda dirigida en contra de sus representados, solicitando su rechazo, con costas, y que para el improbable caso de condenarla, proceder a la rebaja prudencial de la misma conforme lo expresado en el artículo 2330 del Código Civil.

Que, con fecha 24 de abril de 2018 la parte demandante evacuó el traslado de la réplica, ratificando lo expuesto en su libelo, corrigiendo dos errores planteados, uno que dice relación con la eyección del vehículo de su mandante, señalando que efectivamente ello no fue efectivo. El segundo error dice relación con la investigación criminal aludida, señalando que la investigación es de carácter desformalizada, tal como se indicó en la solicitud de medida prejudicial precautoria.

Indica que la parte demandada incurre una contradicción evidente en sus consideraciones de hecho, al señalar que solo la habilidad de la conductora no produjo un accidente fatal para todos, lo que implica un accidente sumamente violento, donde podrían haber fallecidos todos los ocupantes del furgón.



Afirma no ser efectivo que la calzada haya estado en mal estado o haya habido lluvias, dado que se estableció en el formulario de toma de datos en terreno de Carabineros, que el estado de la calzada era bueno y que el estado atmosférico era nublado, no con lluvia.

Expresa que su representada no lleva puesto el cinturón de seguridad porque estaba malo, estaba trabado, lo que se acreditará en la etapa pertinente, lo que no implica que su mandante se haya expuesto imprudentemente al daño.

Destaca que la mención a la causa criminal no se hizo para determinar la responsabilidad civil de las demandadas, sino que es un antecedente que puede contribuir a probar su responsabilidad en esta causa. Que el informe de la SIAT de Carabineros se encuentra acompañado en el cuaderno de medida precautoria, debiendo analizarse por el tribunal la suficiencia e idoneidad del mismo.

Manifiesta que los daños sufridos por su mandante son efectivamente de una gravedad inimaginable, puestos que implicaron que ella dejara de caminar, a tal punto de que en un principio sólo podía transportarse en silla de ruedas, con la asistencia de una tercera persona, por las lesiones en sus brazos, viéndose impedida también para escribir, necesitando asistencia para las actividades más básicas y necesarias de la existencia, siendo valioso para cualquier persona el dormir bien, comer sin ayuda de nadie, cocinar, asearse.

Explica que si bien su representada fue dada de alta por la ACHS, ello no fue en términos absolutos, dado que siguió con tratamiento, debiendo someterse unos meses después a una nueva intervención quirúrgica, incluso conversando con sus médicos que probablemente no será la última.

Que respecto al daño demandado, sostiene que es complejo determinar lo efectivamente sufrido por su mandante, pasando de un día a otro a perder las ganas de vivir y tener que aprender de nuevo a caminar, siendo asistida de otras personas, sin tener certeza de si algún día volverá a ser igual que antes del accidente, siendo el monto acorde y proporcional al daño producido.

Reitera sus consideraciones de derecho, afirmando que efectivamente deben concurrir los requisitos de la responsabilidad extracontractual, debiendo probarse el daño en el término probatorio y no en la demanda, habiendo efectivamente actuado con negligencia la demandada, sin que se le atribuya de su parte una culpa levísima, sin que sea efectivo que el accidente se haya producido por fuerza mayor o caso fortuito, que por lo demás debe probarse por quien lo alega.

Agrega que respecto de la imprudencia de su mandante, reitera que el motivo por el no utilizó el cinturón de seguridad, es atribuible a la conductora y dueño del vehículo, porque éste no funcionaba.



Hace presente que no se ha controvertido la efectividad de haberse producido el accidente y la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo.

Que con fecha 16 de agosto de 2018 se verificó el llamado a conciliación, el cual se tuvo por frustrada atendida la inasistencia de la parte demandada.

Que con fecha 13 de noviembre de 2018 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Que con fecha 03 de diciembre de 2019 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la objeción de documentos de fecha 18 de abril de 2019:

PRIMERO: Que con fecha 18 de abril de 2019, la parte demandante objetó una hoja de vida de conductor de la demandada y un set de fotografías del lugar de ubicación del accidente. Que respecto al primer documento, señala que no se encuentra completo y adolece de una página, apareciendo en la parte final que dice “continua en la página 2”, pero constando solamente de una página, configurando la causal de falta de integridad del documento, por ser parcial e incompleto, no permitiendo apreciar su contenido en su integridad, tratándose de un documento electrónico emanado del Servicio de Registro Civil que permite a las personas verificar los documentos emanados de dicha institución, habiendo corroborado su parte que la hoja de vida tenía 2 páginas, y que la pagina no acompañada da cuenta de la infracción de no respetar signos o señales del tránsito cometidos por la demandada, lo que se encuentra absolutamente ligado con la presente causa, demostrando la mala de la contraparte y acompañando el documento rescatado de la página de verificación de documentos del Servicio de Registro Civil.

Que respecto al segundo documento, objeta por tratarse de un documento privado que emana de la propia parte demandada, que su parte no reconoce por lo que no puede tener valor probatorio, conforme lo dispuesto en el artículo 1702 y 1704 del Código Civil. Añade que los documentos carecen de fecha, por lo que malamente podría hacerse valer contra terceros, lo que permitiría a las partes conocer si las fotografías son de antes o después de que la demandada haya tomado conocimiento de la demanda, con la única finalidad de crear medios probatorios, configurándose la causal de falta de integridad del documento.

SEGUNDO: Que la parte demandada no evacuó el traslado conferido.

TERCERO: Que respecto al primer documento objetado, esto es, una hoja de vida de conductor, habrá que decir que la falta de integridad dice relación con que el documento sea incompleto o mutilado, lo que por supuesto requiere de una prueba específica que así lo acredite. En este sentido, se advierte del tenor del documento acompañado, que efectivamente es un certificado que emana de una



institución pública, que consigna expresamente que “continúa en la página 2”, la que no consta en autos, sumado a que el N° de folio y código de verificación anotados en la parte superior derecha del documento, coinciden con el documento de verificación acompañado por la actora a folio N° 53, apareciendo en aquella la existencia de esta segunda página omitida, razones por la que se dará lugar a la objeción por falta de integridad.

Que respecto del segundo documento objetado, esto es, set de fotografías, habrá que decir que aun cuando se fundó en falta de integridad, no existe prueba que dé cuenta de que las fotografías sean incompletas o mutiladas, no guardando relación con la causal invocada el hecho de no reconocerlas expresamente por la parte demandante, ni carecer de fecha, sin perjuicio del valor probatorio que se les entregue al momento de fallar, por lo que se rechazará esta parte de su objeción.

II.- En cuanto al fondo:

CAURTO: Que, con fecha 26 de febrero de 2018 comparece doña **MARÍA EMILIA ALVARADO MIRANDA**, abogada, en representación de doña **ANA MARÍA SPRINGER HITSTHFELD**, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra de doña **PAOLA ANDREA COFRE ALVARADO** y en contra de don **LUIS MARCELO FURRIANCA ÁLVAREZ**, solicitando se acoja la demanda y proceda a condenar a los demandados a pagar solidariamente a su mandante a título de daño moral, una indemnización de \$45.000.000, o las sumas que se estime de derecho, con los respectivos intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la fecha de ingreso de esta demanda, y todo con expresa condenación en costas, fundada en las consideraciones anotadas en la parte expositiva de este fallo.

QUINTO: Que, con fecha 14 de abril de 2018 comparece **PATRICIO LEANDRO RUIZ JARAMILLO**, abogado, en representación de doña **PAOLA ANDREA ALVARADO COFRE** y don **LUIS MARCELO FURRIANCA ALVAREZ**, quien contestó la demanda opuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas, fundado en las consideraciones anotadas en la parte expositiva de este fallo.

SEXTO: Que la parte demandante evacuó el traslado de la réplica, corrigiendo dos errores en su demanda y ratificando su demanda en todo lo demás, conforme las consideraciones anotadas en la parte expositiva de este fallo.

Que la parte demandada no evacuó el traslado de la dúplica.

SÉPTIMO: Que no habiéndose logrado conciliación, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad de que el día 09 de marzo de 2017, aproximadamente a



las 21:00 horas, en el sector rural Quebrada Honda a la altura del kilómetro 2, comuna de Frutillar, se produjo un accidente del tránsito por la pérdida del control del vehículo minibús marca Hyundai, modelo grace, placa patente única ND-9113, el cual era conducido por doña Paola Andrea Alvarado Cofre, y el cual es de propiedad de don Luis Marcelo Furriancá Álvarez, y que en ese hecho doña Ana María Springer Hitsthfeld sufrió diversas lesiones. Causas esenciales y circunstancias fácticas del mismo; 2.- Condiciones y características esenciales del vehículo minibús marca Hyundai, modelo grace, placa patente única ND-9113, al momento de la ocurrencia de los hechos señalados en el punto anterior; 3.- Efectividad que doña Ana María Springer Hitsthfeld sufrió lesiones físicas y psíquicas derivadas de los hechos señalados en el punto primero. Características, entidad y demás circunstancias esenciales de las mismas; 4.- Efectividad que doña Paola Andrea Cofre Alvarado, al momento de manejar el vehículo minibús marca Hyundai, modelo grace, placa patente única ND-9113, el día 09 de marzo de 2017, a las 21:00 horas aproximadamente, respecto de los hechos señalados en el punto primero, incurrió en un actuar negligente, especialmente en relación a la velocidad que conducía, visibilidad de la ruta, estar atenta a las condiciones del tránsito, vía y entorno, uso de cinturón de seguridad de ella como de los pasajeros que iban a bordo, y demás circunstancias esenciales del accidente; 5.- Existencia de nexo causal entre el hecho ilícito denunciado, y los daños patrimoniales y no patrimoniales ocasionados cuya indemnización se solicita; 6.- Existencia de daño moral ocasionado a doña Ana María Springer Hitsthfeld con ocasión del accidente indicado en el punto primero. En su caso, entidad y monto del daño; 7.- Efectividad de ser don Luis Marcelo Furriancá Álvarez, al tiempo de los hechos descritos en el punto 1º, propietario del vehículo minibús marca Hyundai, modelo grace, placa patente única ND-9113, conducido por doña Paola Andrea Cofre Alvarado; 8.- Efectividad de la existencia de un informe técnico de SIAT de Carabineros de Chile que se pronuncia sobre los hechos descrito en el punto primero; 9.- Efectividad de existir un proceso penal en contra de la demandada doña Paola Cofre Alvarado en relación a los hechos descritos en el punto primero.

OCTAVO: Que la demandante rindió la siguiente prueba:

I.- DOCUMENTAL: 1. Copia de carpeta de investigación fiscal, causa RUC N° 1700239916-4; 2. Certificado Médico de fecha 17 de mayo de 2017, emitido por el médico Rodolfo Versín Acuña; 3. Informe Médico de Atención de fecha 19 de mayo de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad; 4. Certificado de Atención de fecha 11 de noviembre de 2017, emitido por la Unidad Clínica del Servicio Médico Legal de Puerto Montt; 5. Informe Médico de Atención de fecha 16 de noviembre de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad; 6.



Certificado de término de reposo laboral, de fecha 16 de noviembre de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad; **7.** Certificado de inscripción y anotaciones vigentes de vehículos motorizados de fecha 20 de diciembre de 2017, PPU ND.9113-1; **8.** Informe de lesiones, emitido por el médico legista German Quappe de la Maza, con fecha 13 de noviembre de 2017; **9.** Epicrisis de la Clínica Puerto Montt, respecto de la demandante de autos, por las atenciones brindadas entre el 10 de marzo de 2017 al 22 de marzo del mismo año; **10.** Informe de antecedentes médicos, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, con fecha 22 de enero de 2019; **11.** Dos recetas médicas emitidas por don Alejandro Igor Oyarzún, médico psiquiatra, con fecha 23 de agosto de 2017 y 10 de enero de 2019; **12.-** Copia de hoja de vida del conductor de fecha 20 de marzo de 2019; **13.-** Registro médico ambulatorio de la demandante, remitido mediante oficio por la Asociación Chilena de Seguridad, el que se encuentra custodiado en secretaria del tribunal y digitalizado en el expediente digital.

II.- TESTIMONIAL: Que con fecha 09 de abril de 2019, consta declaración de la testigo Pamela Alejandra Gallardo Arias.

III.- CONFESIONAL: Que con fecha 14 de junio de 2019, consta absolución de posiciones de doña Paola Andrea Alvarado Cofre.

NOVENO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba:

I.- DOCUMENTAL: **1.-** Detalle de hoja de atención de la demandante Sra. Springer que da cuenta de su diagnóstico en centro de atención de urgencia de Frutillar; **2.-** Set de fotografías del lugar de ubicación del accidente; **3.-** Acta de audiencia de formalización de investigación de 31 de agosto 2018; **4.-** Resolución de 8 de enero que sobresee la investigación por cuasidelito de lesiones.

II.- TESTIMONIAL: Que con fecha 10 de abril de 2019, consta declaración de los siguientes testigos: **1.-** Bruno Eduardo Bayer Vera; **2.-** Cristian Marcelo Guerrero Cárdenas.

DÉCIMO: Que el objeto del presente juicio es determinar si es procedente la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y en caso de ser así, qué montos alcanzaría dicha indemnización.

Que en efecto, sabido es, que las normas de nuestro sistema jurídico referentes a la responsabilidad extracontractual, tienen por objeto la reparación en dinero de ciertos daños, más precisamente de hacer que los costos de los daños los soporte un tercero distinto de las víctimas lo que se logra mediante la indemnización de perjuicios. En consecuencia, han de reunirse ciertos requisitos para que ella tenga lugar, que constituyen sus supuestos de hecho, los que son: 1) existencia de un daño; 2) si dicho daño es el resultado de una acción u omisión dolosa o culposa del autor; 3) y si entre ambos elementos ya enunciados existe



relación de causalidad, por lo que se deberán analizar los antecedentes probatorios allegados al efecto.

UNDÉCIMO: Que para resolver la demanda de autos, resulta pertinente dejar asentado los siguientes hechos, conforme las alegaciones vertidas en la etapa de discusión y las probanzas allegadas al proceso y ponderadas en forma legal:

1.- Que no ha sido controvertido por los demandados, y así se acredita por lo demás, con el mérito de la carpeta investigativa y certificado de anotaciones vigentes acompañados por la actora, no objetados, que el día 09 de marzo de 2017, aproximadamente a las 21:00 horas, en circunstancias que doña Paola Andrea Cofre Alvarado conducía el vehículo tipo minibús, marca Hyundai, modelo grace, color azul, año 1998, P.P.U ND.9113-1, vehículo de propiedad de don Luis Marcelo Furrián Álvarez, dirigiéndose a buscar y transportar a varias personas desde un predio ubicado en el sector rural La Quebrada Onda, Km. 02, comuna de Frutillar, entre ellos, doña Ana María Springer Hitsthfeld.

Que al momento de iniciar su recorrido, la conductora baja por una pendiente o cuesta, momentos en que pierde el control del vehículo y choca con la ladera del camino, incrustándose el vehículo en una zanja del mismo.

Que no ha sido controvertido que doña Ana María Springer Hitsthfeld, al momento de este accidente, no usaba su cinturón de seguridad.

2.- Que con el mérito de la carpeta investigativa y registro clínico emitido por ACHS, acompañadas por la actora y no objetadas, se acredita que producto del accidente aludido anteriormente, doña Ana María Springer Hitsthfeld fue ingresada de urgencia en el Hospital de Frutillar, donde es diagnosticada con “fractura de la epífisis inferior del húmero”.

Que el día 10 de marzo de 2017, doña Ana María Springer Hitsthfeld fue derivada a la Clínica Puerto Montt, por convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, donde es sometida a una intervención de “Osteosíntesis supra o intercondilea” y “Osteosíntesis diafisiaria”, como respuesta a fractura húmero distal y fractura de la diáfisis del húmero. Que posteriormente, el día 16 de marzo de 2017, doña Ana María Springer Hitsthfeld es sometida a una intervención de “meniscectomía”, como respuesta a una fractura platillo tibial lateral derecho.

Que con el mérito del informe de antecedentes médicos de fecha 22 de enero de 2019 y registro clínico emitido por ACHS, ambos acompañados por la actora y no objetados por la contraria, se acredita que posterior al accidente sufrido por la demandante, ésta debió mantenerse en tratamiento y terapia ante la Asociación Chilena de Seguridad, desplazándose en un principio en silla de ruedas, hasta por lo menos los últimos días de abril de 2017, consignándose en el



registro clínico, el día 28 de abril de 2017, que ya podía usar bastones, consignándose el 25 de julio de 2017, que podía circular con un bastón por dos semanas y después sin bastón.

Que en mayo de 2017, la demandante fue evaluada por otorrinolaringólogo, por otalgia izquierda asociada a tinitus y vértigo, detectándose leve inestabilidad y necesidad de rehabilitación vestibular. Que en noviembre de 2017, la demandante presenta claudicación leve y movilidad de hombro izquierdo limitado, otorgándosele el alta laboral con fecha 18 de noviembre de 2017.

Que aparece del registro clínico de ACHS, que posterior al alta médica otorgada en noviembre de 2017, la demandante mantuvo controles, físicos y psiquiátricos, además de terapias kinésicas, en la ACHS, incluso siendo nuevamente intervenida en mayo de 2018, volviendo a usar bastones.

3.- Que con informe de lesiones que integra la carpeta investigativa, no objetada, se acredita que las lesiones sufridas por doña Ana María Springer Hitsthfeld, fueron catalogados como de carácter graves, con un tiempo aproximado de recuperación de 9 a 12 meses, con igual tiempo de incapacidad y requiriendo nuevas intervenciones.

4.- Que con copia de carpeta investigativa acompañado por la actora y copia de resoluciones de formalización y sobreseimiento, acompañados por los demandados, no objetados, se acredita que con motivo del accidente aludido en el N° 1, en audiencia de fecha 31 de agosto de 2018, el Ministerio Público formalizó investigación en contra de doña Paola Andrea Cofre Alvarado, en su calidad de autora del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 490 y 491 inciso 2° y 4, ambos del Código Penal, originándose la causa RIT 1510-2018 seguida ante el Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Que en dicho proceso, se aprobó un acuerdo reparatorio consistente en el pago por parte de doña Paola Andrea Cofre Alvarado, de la suma de \$800.000, en 4 cuotas de \$200.000 cada una, acuerdo que se cumplió íntegramente y que motivo la declaración de sobreseimiento definitivo de la causa, por resolución de fecha 08 de enero de 2019.

DUODÉCIMO: Que la primera cuestión a dilucidar, dice relación con la existencia de una acción u omisión dolosa o culposa del autor, en este caso, la supuesta negligencia en que habría incurrido la demandada Paola Andrea Cofre Alvarado, al momento del accidente de fecha 09 de marzo de 2017, quien sin perjuicio de reconocer la existencia y fecha del hecho denunciado, alega que éste se motivó por un hecho fortuito, en razón de las condiciones climáticas existentes en ese momento y el estado de la calzada.



Que al efecto, tal como se estableciera en el N° 1 del considerando 11°, el accidente de tránsito que funda la acción de autos, se produjo el día 09 de marzo de 2017, aproximadamente a las 21:00 horas, en el sector rural La Quebrada Onda, Km. 02, comuna de Frutillar, específicamente, en una pendiente cuesta abajo. Que seguidamente, cabe destacar que habiéndose acompañado la carpeta investigativa recopilada por el Ministerio Público, no objetada por la parte demandada, no consta en aquel algún informe especializado que haya analizado el sitio del suceso, sin perjuicio de lo cual, aparecen dos documentos que dan cuenta de dichas condiciones, siendo el primero el propio parte policial confeccionado por Carabineros de Chile, el mismo día del accidente, donde se declara que la *“calzada era de concreto, húmedo con barro, buen estado, visibilidad: nocturna, sin iluminación., señalización: no existe, huellas: no se observan huellas de frenado o maniobras.”*, agregando respecto a la causa basal probable: *“según propia versión del conductor, falla del sistema de frenado”*, sumado al formulario para toma de datos en terreno de accidente al tránsito, confeccionado igualmente por Carabineros de Chile, el mismo día del accidente, donde es expresa que el accidente fue en un sitio rural, sin señalización, con estado atmosférico nublado, luminosidad nocturna, calzada unidireccional, una pista, calzada de concreto, en buen estado, y en condición húmeda con barro. A su turno, los testigos que declararon en autos, lo hicieron respecto a estas condiciones y posibles causas del accidente, declarando la testigo de la demandante, doña Pamela Alejandra Gallardo Arias, que *“la señora conducía en un horario de tarde noche, estaba nublado, no llovía, iba a una velocidad fuerte para las condiciones del camino, ya que se trata de un camino rural, vecinal de piedra, que cuenta con curvas y subidas, además, es un sector húmedo, en el cual existe en algunos sectores huellas de cemento, donde apenas cabe la rueda, creo que iba a mucha velocidad...”*, declarando que le constaba los hechos porque iba al interior del vehículo como pasajera, lo que se corrobora con la copia de la carpeta investigativa, apareciendo como una de las víctimas. Por su parte, declararon dos testigos por la parte demandada, siendo el primero don Bruno Eduardo Bayer Vera, quien se identificó como bombero y que en dicha calidad, había concurrido al lugar de los hechos por un llamado a la centra de radio, declarando que *“el tiempo estaba lloviendo, la luminosidad era oscura, el camino es complicado, es pura cuestas y quebradas en un solo sentido, este es un camino interior”*, agregando respecto a las causas del accidente, que *“para mí fue por las condiciones del camino, porque hemos ido a otras emergencias ahí”*. Declaró seguidamente don Cristian Marcelo Guerrero Cárdenas, quien también se identificó como bombero, de la 2° compañía de Frutillar, y que concurrió al lugar



de los hechos, señalando que *“la salida del lugar es complicado, es una huella, no tiene asfalto completo”, “ese día hubo lluvia, la luminosidad era cero, las condiciones del camino eran malas, este camino es al interior de un predio”,* agregando respecto a la causa del accidente, que *“por lo que se pudo recopilar en el lugar, es un camino resbaladizo con una curva demasiado pronunciada en ese sector.”*

DÉCIMO TERCERO: Que con lo expuesto en el considerando anterior, habrá que decir que apreciada la prueba documental, en conjunto con las declaraciones vertidas en juicio, aparecen que éstas últimas son contradictorias entre las partes, en aquella parte referidas a las condiciones climáticas reinantes el día de los hechos, desde que la testigo de la actora declaró que ese día estaba nublado, a diferencia de los dos testigos de los demandados, quienes refieren que era un día lluvioso, mas dicha contradicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 384 N° 3 y 428 del Código de Procedimiento Civil, puede salvarse con el resto de probanzas allegadas al proceso, prefiriéndose la versión de la actora, desde que se corrobora con la documental aludida en el párrafo anterior, respecto de las condiciones anotadas por personal de Carabineros de Chile, las que fueron plasmadas en horas posteriores al acaecimiento del accidente, cuestión no menor, si se toma en consideración que la declaración de los dos bomberos lo fue en abril de 2019, esto es, 2 años después de los hechos, pudiendo dichas declaraciones verse influidas por el olvido o confusión debido al natural curso del tiempo. Además, sin perjuicio que la demandada Paola Andrea Cofre Alvarado declaró en su absolucón de posiciones, que no era efectivo el buen estado de la calzada donde se produjo el accidente, sino que es una baja de tierra y que el día de los hechos llovía, no se veía nada, consta en el propio parte policial que fue ella quien, en su condición de conductora, declaró en su oportunidad que había tenido una falla en el sistema de frenado, sin que se haya controvertido esta declaración, la que resulta contraria a su propia absolucón, donde declaró que era efectivo que el sistema de frenado del minibús se encontraba en perfecto estado, más el informe reservado de la SIAT, que integra la carpeta investigativa, donde aparece haberse inspeccionado el vehículo participante en el accidente, concluyendo que *“el sistema de frenado del móvil, estaba en buenas condiciones al momento del accidente, no siendo la causal directa del accidente de tránsito.”*, contradicción que motiva a restar seriedad a sus declaraciones, prefiriéndose aquella prueba que dice mención a condiciones de nubosidad al momento de los hechos y a un buen estado de la calzada, sin perjuicio de su inclinación, humedad y barro.

DÉCIMO CUARTO: Que con lo anterior, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 144 del DFL. 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado



de la ley de tránsito N° 18.290, el que señala: “*Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal, que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes. Con todo, el conductor del vehículo deberá siempre respetar los límites máximos de velocidad prescritos en el artículo siguiente.*”, sumado a lo dispuesto en el artículo 167 N° 7: *En los accidentes del tránsito, constituyen presunción de responsabilidad del conductor, los siguientes casos: 7.- Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, según lo establecido en el artículo 144;*”, normas que confrontadas con los hechos establecidos en los considerandos anteriores, permite establecer la responsabilidad de la demandada Paola Andrea Cofre Alvarado en el accidente sublite, desde que las condiciones del camino, en bajada, con una sola pista, húmeda y con barro, obligaban a la conductora a adoptar una velocidad razonable y prudente para transitar por ella, tomando en consideración que la testigo Pamela Alejandra Gallardo Arias declaró que la conductora iba a una velocidad fuerte para las condiciones del camino, sumado a que los dos bomberos que declararon por la demandada, sin perjuicio de la prevención hecha en el considerando anterior, indicaron que el camino era complicado, pura cuestas y quebradas en un solo sentido (Bruno Bayer), resbaladizo con una curva demasiado pronunciada (Cristian Guerrero), agregando incluso el primero de ellos, que habían ido a otras emergencias ahí, lo que permite inferir que la conductora no ejerció su conducción en una velocidad compatible con las características del sitio del suceso, evidenciándose esto en las fotografías del vehículo que se constatan en el informe reservado de la SIAT, y la ausencia de huellas de frenado que consigna el parte policial, circunstancias que permiten presumir que fue la velocidad adoptada por la demandada al momento del accidente, la que no le permitió reaccionar eficazmente para prevenir el hecho denunciado, descartándose con ello la existencia de un caso fortuito, ante la inexistencia de prueba suficiente acerca de las condiciones de lluvia alegadas por la demandada, sumado a que las solas condiciones que presentaba el camino en cuestión, difícilmente podrían configurar un hecho imprevisto a que no es posible resistir, desde que la sola dinámica del accidente, permite establecer que la conductora debió primeramente ascender a la búsqueda de las personas transportadas, instante donde fácilmente podría haber detectado las condiciones adversas que alega en su contestación, pudiendo adoptar las prevenciones del caso al momento de descender por la calzada.



DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo de las pruebas rendidas, los hechos establecidos en el considerando 11°, y lo expuesto y razonado en el considerando anterior, es posible establecer que doña Ana María Springer Hitsthfeld sufrió diversas lesiones que encuentran su nexo causal directo en la acción ilícita perpetrada por doña Paola Andrea Cofre Alvarado, el día 09 de marzo de 2017, desde que puede inferirse que de no haber mediado este accidente, la actora no se habría visto forzada a someterse a intervenciones y terapias que duraron al menos, hasta mayo del 2019, conforme los antecedentes del registro médico acompañado. Que, además, en el presente caso no existe controversia alguna sobre otros elementos de la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO SEXTO: Que en cuanto a determinar la existencia y monto del daño sufrido por la demandante, habrá de tenerse presente que ésta sólo solicita la indemnización del daño moral, al señalar que los gastos médicos habrían sido cubiertos por el seguro de accidente del trabajo, debiendo estarse a las probanzas allegadas al proceso y ponderadas en forma legal. En este sentido, el libelo distingue dos aristas o clasificaciones del daño demandado, aludiendo en primer lugar a un daño positivo, producto del accidente que ha aumentado su dolor tanto físico como mental, y en segundo lugar a un daño negativo, consistente en haberse influido de forma considerable en su vida cotidiana, perdiendo la alegría de vivir, solicitando una suma única de \$45.000.000.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que para resolver resulta fundamental contar con antecedentes que den cuenta cierta de la magnitud del perjuicio real y efectivo sufrido por la víctima, frente a lo cual, se estará a los hechos acreditados en los puntos N° 2 y 3 del considerando 11° de este fallo, respecto a los daños físicos e intervenciones a que se sometió la actora, sumado a que del propio registro clínico emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, consta que ésta mantuvo permanentes dolores durante el tiempo de incapacidad, los que se mantuvieron después del alta médica otorgada en noviembre de 2017, debiendo además someterse a evaluaciones psiquiátricas, apareciendo con un diagnóstico constante de trastornos de adaptación, además de consignarse específicamente en enero de 2018, haberse indicado reposo por psiquiatra por recaída en fenómeno postraumático, después, con fecha 19 de febrero de 2018, se consigna que se le nota muy angustiada debido a que se tendría que reoperar eventualmente, que tiene claros signos de estrés post traumático (angustia y recuerdos invasivos, asociados a ansiedad previa a la exposición) relacionados al camino que tiene que realizar a su trabajo, donde tuvo el accidente, apareciendo que en mayo de 2019 seguía con controles por psiquiatra, conforme se anota en las últimas páginas de la ficha clínica.



DÉCIMO OCTAVO: Que con lo referido previamente, se tendrá por acreditado la existencia del daño moral demandado, respecto a los dolores sufridos por la actora producto de sus lesiones corporales, desde que aun con lo esgrimido latamente en el registro clínico acompañado, las máximas de la experiencia permiten sostener que toda lesión a la integridad física trae aparejado un cierto grado de menoscabo mental o espiritual, el que se intensificara de acuerdo a la gravedad de estas lesiones, las que en este caso tuvieron el carácter de grave, según el informe del Servicio Médico Legal, incapacitando a la demandante para su trabajo por varios meses, lo que fue corroborado por la testigo Pamela Gallardo Arias, al declarar que la demandante se siente bajoneada por todo esto, reacción emocional totalmente esperable en una persona que se ve envuelta en un accidente de tránsito y que se ve en la necesidad de concurrir permanentemente a controles médicos, desvirtuándose con ello las alegaciones de los demandados, quienes sostenían que en dos meses estaba recuperada y en ocho meses dada de alta en términos absolutos.

Que junto a lo anterior, estos dolores claramente tienen una influencia en el diario vivir, desde que habiéndose encontrado en reposo absoluto desde la época del accidente, hasta el alta médica en noviembre de 2017, en dicho tiempo debió abocarse completamente a su recuperación, sin posibilidad de optar por actividades de común realización en toda persona, entiéndase recreación o actividades domésticas, sumado a que posterior al alta médica, mantuvo sus controles e incluso, debió someterse a nuevas intervenciones.

Que con lo expuesto hasta ahora, no existiendo normas objetivas de cuantificación del daño moral, el que debe traducirse en una apreciación basada en la prudencia del juez y el mérito del proceso, se fijará una indemnización prudencial por la suma de \$10.000.000.

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto a la efectividad de haberse expuesto la demandante imprudentemente al daño, en los términos alegados por los demandados, habrá que decir que ambas parte coinciden en sus respectivos relatos, en que la actora no usaba cinturón de seguridad al momento del accidente sublite, justificándose por la actora que estos se encontraban en mal estado, al contrario de los demandados, quienes sostienen que se le advirtió de su uso y que fue la pasajera quien decide no usar su cinturón de seguridad. En este sentido, conforme la carga de la prueba establecida en el artículo 1698 del Código Civil, era consorte de los demandados rendir las probanzas necesarias para acreditar sus alegaciones, prueba que no consta en autos, desde que no consta en la carpeta investigativa algún análisis respecto de las condiciones de los cinturones de seguridad del vehículo siniestrado, sumado a que sus dos testigos, bomberos



que habrían concurrido a en auxilio de las víctimas del accidente, no entregan antecedentes suficientes al efecto, declarando el testigo Bruno Bayer que las personas de adelante estaban sin cinturón (tal como reconocen ambas partes del juicio), pero que las que estaban a tras estaban con cinturón, declarando por su parte don Cristian Guerrero, que le constaba que los cinturones estaban funcionando, porque se veía personas con cinturones y se hace una verificación de ello, lo que parece contradictorio con la declaración de doña Pamela Gallardo Arias, quien declaró que los asientos estaban sin cinturones de seguridad, contradicción que se salvará en los mismo términos expuestos en el considerando 13° de este fallo, debiendo rechazarse la alegación de los demandados.

VIGÉSIMO: Que las demás prueba allegada en el proceso en nada altera lo razonado, desde que la hoja de atención de urgencia acompañado por los demandados es el mismo que integra la carpeta investigativa, ya apreciada y valorada, las fotografías acompañadas no presentan indicación alguna de su contenido, lo que no puede suplirse por los dichos de quien los presenta, y las resoluciones dictadas en sede penal dan cuenta del acuerdo reparatorio alcanzado por las víctimas y la demandada conductora, junto con el sobreseimiento definitivo decretado a favor de ésta última, sin que se haya alegado alguna imputación al pago por los demandados.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto a la efectividad de ser el demandado Luis Marcelo Furrianza Álvarez, al tiempo de los hechos descritos en el punto 1°, propietaria del minibús PPU ND-9113, conducido por su co-demandado, se estará a las probanzas incorporadas en autos, en especial al Certificado de Inscripción y anotaciones vigentes del vehículo tipo minibús, marca Hyundai, modelo grace, color azul, año 1998, P.P.U ND.9113-1, hecho que no fue controvertido por las partes del presente proceso, por lo que se tiene este hecho por acreditado, cumpliéndose la hipótesis de las responsabilidades solidarias demandadas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 169, inciso 2°, del DFL. 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito N° 18.290.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que tratándose de una sentencia declarativa, las sumas señaladas en lo resolutivo deberán ser pagadas con los intereses corrientes correspondientes, desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, sin condenarse al pago con reajustes, por no haberse solicitado en el petitorio del libelo. Que por lo antes razonado, este tribunal acogerá la demanda, solo en cuanto a los rubros ya indicados, como se dirá en lo resolutivo.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 2314 y siguientes del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 428 y



siguientes del Código de Procedimiento Civil; y artículos 144, 167, 169 y siguientes de la Ley de Tránsito, se declara:

I.- Que se acoge la objeción de documentos de fecha 18 de abril de 2019, respecto de la hoja de vida de conductor acompañado por los demandados, y se rechaza respecto al set de fotografías acompañado por la misma parte.

II.- Que se **ACOG**E la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, planteada por doña María Emilia Alvarado Miranda, abogada, por Ana María Springer Hitsthfeld, en contra de doña Paola Andrea Cofre Alvarado y solidariamente en contra de don Luis Marcelo Furrianca Álvarez, condenándose a los demandados, al pago solidario a la demandante de la suma de **\$10.000.000** a título de daño moral.

Que esta suma deberá ser pagada con los intereses corrientes correspondientes, desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

III.- Que se rechaza la exposición imprudente al daño, alegado por los demandados en su contestación.

IV.- Que no se condena en costas a los demandados, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Anótese, Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL C-2739-2017.-

Dictó doña **Ruby Yáñez Kinzel**, Juez Subrogante del Juzgado de Letras de Puerto Varas

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Puerto Varas, siete de febrero de dos mil veinte.**

